



BALANCE ÉTICO GLOBAL - BEG

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional - CONSEA

Sesión de debate celebrada el 6 de noviembre de 2025 (a distancia)

Presentación

El Balance Ético Global (BEG) es una iniciativa sin precedentes del Gobierno brasileño con el apoyo de la ONU y la presidencia brasileña de la COP30. «Si ya hemos acordado lo que hay que hacer para hacer frente a la crisis climática, ¿por qué no lo cumplimos?». Esta es la pregunta central del Balance Ético Global (BEG) que, a través de la escucha ética y activa de la sociedad civil, busca reunir contribuciones para acelerar la implementación de acciones para el cumplimiento efectivo de las decisiones acordadas para enfrentar la crisis climática. Para ampliar la participación social, la iniciativa cuenta con una propuesta de Diálogos Autogestionados, con el fin de que las personas, los líderes y los movimientos sociales de cualquier parte del mundo puedan aportar reflexiones y sugerencias sobre los retos que el cambio climático representa para el planeta.

Con el fin de presentar su contribución a este proceso, el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea) llevó a cabo una actividad de diálogo autogestionado del BEG, partiendo de su perspectiva de defensa del derecho humano a una alimentación adecuada y de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional para responder a las cuestiones planteadas. La metodología implicó la realización de varias etapas: se invitó a representantes de las organizaciones del Consea a responder a las preguntas propuestas; las respuestas se consolidaron en un documento y se debatieron en una reunión remota para aprobar el texto final, que se enviará como contribución del CONSEA.

De esta manera, el consejo busca contribuir con su visión que congrega la diversidad brasileña y reforzar el papel fundamental de los sistemas alimentarios sostenibles para la crisis climática. El Consea reafirma su compromiso con el futuro que deseamos, con la fuerza de las organizaciones y los movimientos sociales en diálogo con el gobierno, y en defensa de la democracia y la soberanía popular.

Resumen de las respuestas al formulario BEG CONSEA

1. ¿Por qué tantas veces negamos o ignoramos lo que la ciencia y los conocimientos tradicionales dicen sobre la crisis climática, y compartimos o consentimos la desinformación, aun sabiendo que hay vidas en riesgo?

Negamos o ignoramos lo que la ciencia y los conocimientos tradicionales dicen sobre la crisis climática porque vivimos en una sociedad estructurada por la supremacía de los intereses económicos, que a menudo antepone el lucro a la vida. Esta lógica capitalista rompe el vínculo entre las personas y la naturaleza, transformando la alimentación, la tierra, el agua, todas las formas de vida y el conocimiento en mercancías. La distancia entre quienes producen preservando las identidades y la sociobiodiversidad alimentaria en relación con quienes consumen conduce a la desconexión y la alienación colectiva, invisibiliza los conocimientos y debilita las prácticas sostenibles que podrían garantizar el equilibrio entre la sociedad y el medio ambiente.

Además, la influencia y el poder económico del sector privado en las políticas públicas y los medios de comunicación distorsionan las prioridades y difunden desinformación, lo que debilita la confianza en la ciencia y devalúa los conocimientos ancestrales. Cabe destacar, además, que el monopolio de los medios de comunicación y la fuerte publicidad estratégica de las grandes corporaciones que detentan el poder económico en el ámbito de la alimentación se utilizan para deslegitimar las prácticas y los conocimientos tradicionales. La negación y la desinformación no son solo falta de conocimiento, sino un proyecto intencional que naturaliza y refuerza la desigualdad, el racismo y la destrucción de la naturaleza, alejándonos de soluciones verdaderamente justas y sostenibles.

En este sentido, cabe destacar la acción de grupos políticos —especialmente, pero no solo, de extrema derecha— que utilizan como estrategia común la negación de la ciencia y la realidad y la propagación de la desinformación como método de actuación y defensa de intereses privados, como forma de manipular la opinión pública y erosionar la confianza en las instituciones democráticas y científicas.

A las cuestiones mencionadas anteriormente se suma el hecho de que las actuales estructuras de financiación y difusión del conocimiento científico generan una concentración en las formas de difusión del conocimiento y el predominio de una ciencia positivista y científicista, lo que también refuerza la desacreditación de los conocimientos tradicionales. Cabe destacar también la apropiación de patentes por parte de las grandes corporaciones, como forma de cooptación y apropiación de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos. Por lo tanto, es importante encontrar mecanismos decoloniales y concretos para la protección, valoración, fomento y difusión de diferentes conocimientos y prácticas, y para que estos puedan influir en los procesos de toma de decisiones a diferentes niveles.

Por último, cabe destacar la garantía del derecho a la tierra y al territorio como estrategia esencial para la protección de los conocimientos tradicionales y la ciencia ancestral, la promoción de prácticas y tecnologías sociales sostenibles y saludables y la conservación de la sociobiodiversidad, tanto en el ámbito rural como en el urbano. Por lo tanto, no es posible promover la valorización y el diálogo de conocimientos para hacer frente a la crisis climática sin

políticas públicas efectivas de regularización y protección de los territorios indígenas, quilombolas y otros pueblos del campo, de los bosques y de las aguas, así como de los territorios periféricos urbanos.

2. ¿Por qué seguimos con modelos de producción y consumo que perjudican a los más vulnerabilizados y no están alineados con la misión 1,5 °C?

Los modelos de producción y consumo que agravan la crisis climática también son responsables de deteriorar los indicadores de salud humana y perjudicar aún más a los grupos en situación de vulnerabilidad. Esto se debe a que estos modelos están arraigados en un proyecto político y económico hegemónico: el de la agroindustria, la acuicultura a gran escala y las grandes corporaciones. Este sistema se mantiene gracias a las subvenciones públicas, a la alianza entre los gobiernos y el capital financiero y a la transformación de los alimentos —bien común y derecho humano— en mercancía. La desconexión entre quienes producen y quienes consumen, marcada por largas cadenas de distribución de alimentos, invisibiliza la realidad de la agricultura familiar, la pesca artesanal y las comunidades y pueblos del campo, los bosques y las aguas/maretorios, impidiendo que la sociedad reconozca los impactos ambientales y humanos de la producción industrial. Además de esta desconexión, factores políticos y comerciales, como la falta de regulación de las grandes corporaciones, también contribuyen a mantener estos impactos. Al mismo tiempo, los conocimientos y prácticas tradicionales, como la agroecología, los sistemas agroforestales, el uso y la conservación de semillas criollas y especies nativas, la gestión comunitaria de la pesca y la pesca artesanal siguen siendo invisibles y desvalorizados, mientras que el mito de que «solo se produce con veneno y grandes máquinas» legitima un modelo depredador y concentrador. Este modelo intensivo produce bienes de consumo innecesarios y nocivos para la salud humana, como los alimentos ultraprocesados.

Para agravar esta desigualdad, los alimentos saludables se vuelven más caros e inaccesibles debido a una combinación de factores económicos y fiscales, estructurales y climáticos. La falta de políticas fiscales que equilibren los precios de los alimentos saludables en relación con los ultraprocesados, la inflación, los fenómenos extremos causados por la crisis climática y la falta de una estructura favorable a los modelos de pequeña producción hacen que los alimentos ultraprocesados ganen cada vez más espacio en las mesas de la población, especialmente la más empobrecida, perjudicando la salud, aniquilando culturas y borrando recuerdos de sabores y conocimientos. El hambre y otras expresiones de inseguridad alimentaria, junto con la pobreza, se asocian a múltiples exclusiones por motivos de clase, género, identidad de género, identidades afectivo-sexuales, raza y etnia. Estas exclusiones predominan en los territorios considerados periféricos (rurales, urbanos o periurbanos) y, por el contrario, es en estos espacios donde se concentran diferentes formas de resistencia, ya sea mediante la conservación de los biomas, el mantenimiento de las prácticas tradicionales o la construcción y difusión de los conocimientos locales y tradicionales.

Estos sistemas alimentarios intensivos profundizan las desigualdades, el racismo estructural y el patriarcado. Violan los cuerpos-territorios, explotan y precarizan el trabajo, principalmente el de las mujeres. Contaminan la leche materna, envenenan los alimentos, la tierra, el agua y el aire. Provocan violencia y destrucción de la naturaleza. Expulsan a la población de sus espacios ancestrales y de las instancias de decisión y poder, que están dominadas por los intereses corporativos.

Las consecuencias de este modelo recaen de manera desigual e injusta sobre los pueblos del campo y las comunidades tradicionales. Los campesinos y las campesinas sufren directamente los efectos de la crisis climática —sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad— y se ven intoxicados por los agrotóxicos pulverizados, cuyo uso indiscriminado y estimulado socava la soberanía alimentaria, además de ver amenazados sus territorios por el avance de los monocultivos. Paradójicamente, son estos mismos agricultores y agricultoras familiares los que garantizan el 80 % de la yuca, el 59 % de los porotos, el 63 % de la leche y otros alimentos básicos que llegan a la mesa de la población brasileña, además de mantener sistemas productivos que enfrían el planeta y protegen la sociobiodiversidad (IBGE, Censo Agropecuario 2017). En las aguas, la producción a gran escala de tilapia, camarones y otros pescados provoca el desplazamiento de la pesca artesanal, la acumulación de metales, residuos y otros contaminantes, que dañan el ecosistema acuático y la salud de los pueblos que viven allí. Sin embargo, las autoridades públicas aún no reconocen plenamente el papel estratégico de la acuicultura y la agricultura familiar y de los pueblos y comunidades tradicionales. Las políticas de apoyo y financiación de la agroecología, la agricultura familiar y la pesca artesanal son insuficientes, están mal distribuidas y, a menudo, mantienen la lógica de la producción de materias primas.

Mientras tanto, el discurso dominante sigue estando moldeado por el poder corporativo y la lógica del capitalismo verde, que practica el *greenwashing* y difunde falsas soluciones para mantener el control sobre el sistema alimentario. En este discurso predominan soluciones como el mercado de carbono y la bioeconomía, que mercantilizan la naturaleza y convierten los bienes comunes en activos financieros. Estas falsas soluciones se apoyan en ideas de innovación sostenible y en promesas irreales de compensación desarticuladas de un enfoque basado en la justicia social, ambiental y económica. Estos mecanismos permiten a las grandes corporaciones perpetuar prácticas depredadoras, apropiándose de los conocimientos tradicionales y poniendo en peligro los modos de vida de estas comunidades y pueblos. Los retos a los que se enfrentan las organizaciones sociales, urbanas y rurales, a la hora de disputar la narrativa pública dificultan el avance de una práctica contrahegemónica basada en la solidaridad, la esperanza y el cuidado. Mantener el modelo actual de producción y consumo es, por lo tanto, mantener las desigualdades: protege los beneficios de unos pocos y sacrifica los derechos de muchos, alejando al mundo del objetivo de 1,5 °C y perpetuando una crisis que afecta de manera desproporcionada a quienes menos han contribuido a causarla.

Un gran desafío para los países es la plena realización del derecho humano a una alimentación adecuada. En el contexto de la superposición de las crisis ecológicas, alimentarias y energéticas, la cuestión más apremiante en relación con la producción de alimentos es que los países deben reorientar sus sistemas productivos para que sean sostenibles, justos, abundantes y contribuyan a la realización progresiva del derecho humano a una alimentación adecuada. La agroecología se considera el medio de desarrollo agrícola que no solo presenta fuertes conexiones conceptuales con el derecho a la alimentación, la dignidad humana y el medio ambiente, sino que también tiene resultados probados para un rápido progreso en la realización de este derecho humano para muchos grupos vulnerabilizados en diversos países y entornos. La agroecología y la gestión artesanal y comunitaria de la pesca aportan contribuciones sociales, ambientales y económicas que superan los enfoques convencionales tanto en términos de

productividad como de sostenibilidad. Es posible crear un entorno propicio para estos modos de producción sostenibles y agroecológicos mediante la adopción de políticas públicas adecuadas, entre las que se incluyen: invertir en conocimientos y servicios de investigación y extensión agrícola para la transición agroecológica; invertir en formas de organización social que estimulen las asociaciones, incluyendo escuelas de campo para agricultores y redes de innovación e intercambio de conocimientos entre movimientos de agricultores/as y pescadores/as familiares; ampliar el acceso a la tierra; proteger el derecho al agua; empoderar a las mujeres y a los jóvenes; y crear un entorno macroeconómico y político propicio, poniendo en contacto a las comunidades y pueblos de los bosques, los campos y las aguas con mercados justos y circuitos cortos de distribución de alimentos.

3. ¿Qué podemos hacer para garantizar que los países ricos, grandes productores y consumidores de combustibles fósiles, aceleren sus transiciones y contribuyan a la financiación de estas medidas en los países más vulnerables?

En primer lugar, es importante destacar que, en Brasil, el sistema alimentario dominante es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero: según el Observatorio del Clima, en 2021, el modelo agroindustrial contribuyó con el 73,7 % de las emisiones brutas totales de dióxido de carbono, si se tienen en cuenta las contribuciones directas, como las emisiones procedentes de los animales, y las indirectas, que incluyen la deforestación y el cambio de uso del suelo. Según el estudio, la mayor parte de estas emisiones proviene del cambio de uso de la tierra y los bosques y de la deforestación (56,3 %), seguido del sector agrícola y ganadero (33,7 %) (Observatorio del Clima - Sistema de Estimaciones de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero en Sistemas Alimentarios, 2023).

Además, cabe destacar la relación de dependencia de este modelo vinculado a los grandes productores y conglomerados comerciales minoristas del país con el uso de derivados fósiles, por ejemplo, mediante el uso de agroquímicos e insumos, el alto grado de procesamiento de alimentos que requieren mucha energía para el control de la temperatura y el funcionamiento de la maquinaria, el uso de envases plásticos y las largas cadenas de transporte y comercialización de alimentos. Por lo tanto, más allá de la preocupación por el uso de combustibles fósiles, es necesario reconocer el papel que el actual modelo hegemónico de producción, procesamiento, comercialización y consumo de alimentos tiene en la lucha contra el cambio climático.

Para garantizar que los países ricos —especialmente los del Norte Global, que son grandes productores y consumidores de combustibles fósiles— aceleren sus transiciones energéticas y contribuyan con la financiación climática en los países más vulnerables, es necesario reconocer y valorar las soluciones ya existentes en los territorios, especialmente las impulsadas por la agricultura familiar y campesina y por los pueblos indígenas y los pueblos y comunidades tradicionales, que han demostrado prácticas reales de mantenimiento o transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Sin embargo, estas iniciativas aún carecen de inversiones y visibilidad, ya que los recursos públicos y privados siguen concentrados en sectores contaminantes y en la agroindustria y la acuicultura a gran escala. Por lo tanto, el cambio exige reorientar las subvenciones, denunciar el *greenwashing* y redirigir las inversiones hacia el uso sostenible de la naturaleza que fortalezca las comunidades locales. Esto implica también hacer

frente a las relaciones asimétricas e injustas de poder geopolítico, económico, social y de género, que mantienen el actual modelo de explotación y desigualdad global.

En este sentido, es fundamental que las políticas públicas sobre energías renovables se diseñen con participación social, justicia y sostenibilidad, ya que, sin salvaguardias, los proyectos anunciados como «verdes» pueden agravar las desigualdades, apropiarse de tierras comunales y forzar desplazamientos, especialmente entre agricultores y agricultoras familiares, pueblos y comunidades tradicionales y pueblos de los campos, las aguas y los bosques. Ya se ha documentado, en diferentes regiones del Nordeste, que los parques eólicos y solares han avanzado sobre áreas de uso colectivo y territorios tradicionales, con informes de «*green grabbing*» (apropiación verde) y presión sobre el suelo asociados a proyectos de grandes empresas, lo que ha llevado a los residentes a abandonar sus hogares y modos de vida por la pérdida de acceso a la tierra, el agua y los pastos comunitarios, como los pastizales. También se han documentado problemas de salud física y mental entre los residentes y sufrimiento animal. Cabe destacar el ejemplo de la región de Seridó (Rio Grande do Norte y Paraíba), en el semiárido brasileño, donde las comunidades quilombolas y rurales denuncian que la expansión de las plantas solares está destruyendo la Caatinga, secando los cursos de agua locales y deteriorando las condiciones de producción, con casas abandonadas ante la imposibilidad de permanecer en el territorio. Otro ejemplo que indica la preocupación por las falsas soluciones de energías renovables es el del municipio de Umburanas (Bahía, noreste de Brasil) y sus alrededores, donde los residentes afirman haber sido privados de partes de sus territorios por proyectos eólicos, con litigios y protestas que narran desplazamientos y pérdida de calidad de vida, incluyendo casos en los que las familias cartografiaron sus áreas y, aún así, han visto cómo se levantaban aerogeneradores dentro de sus límites, lo que les ha obligado a abandonar sus hogares y a interrumpir sus actividades extractivas tradicionales. También cabe destacar la preocupación por la instalación de turbinas eólicas *marinas*, que pueden provocar la exclusión de las zonas de pesca artesanal y afectar directamente a las condiciones de vida de las poblaciones locales. Por último, pero no menos importante, es relevante observar los impactos negativos de la implementación de grandes centrales hidroeléctricas, con el clásico y lamentable ejemplo de la central de Belo Monte, donde el monitoreo independiente realizado por las propias comunidades, en colaboración con investigadores de la Universidad de São Paulo y del Instituto Socioambiental, indica una reducción de hasta el 80 % del caudal del Volta Grande do Xingu, lo que compromete la sociobiodiversidad y afecta gravemente los modos de vida de los pueblos indígenas y las comunidades ribereñas que dependen de la pesca y de los ciclos naturales del río para su subsistencia. Por lo tanto, para que la transición energética sea justa y sostenible, es indispensable garantizar la consulta y el consentimiento previos, la distribución de los beneficios, la protección de los territorios y los medios de vida, así como modelos alternativos descentralizados y cooperativos que reduzcan los conflictos y eviten que las soluciones renovables, concebidas para hacer frente a la crisis climática, den lugar a nuevas formas de injusticia territorial y desplazamiento de comunidades. Además, cabe destacar las soluciones promovidas por organizaciones de la sociedad civil brasileña, como la Articulação do Semiárido Brasileiro (Articulación del Semiárido Brasileño) - ASA (Programa Um Milhão de Tetos Solares) (Programa un Millón de Techos Solares) y el Movimento de Atingidos por Barragens (Movimiento de los Afectados por Represas) - MAB (planta solar fotovoltaica Veredas Sol e Lares, con gestión popular y participativa), que deben valorarse y fomentarse.

Además, es imprescindible reforzar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas y garantizar que los compromisos asumidos en los acuerdos multilaterales se cumplan con transparencia, objetivos vinculantes y participación social efectiva. Los países del Sur Global y las islas, que son los que más sufren los efectos de la crisis climática, deben ser escuchados y participar en los procesos de decisión y financiación. La movilización de la sociedad civil y los movimientos sociales es fundamental para exigir justicia climática, gravar los beneficios excesivos de las empresas fósiles y eliminar las subvenciones que sustentan la destrucción del medio ambiente y la salud de las poblaciones. Solo con presión política, solidaridad nacional e internacional y el fortalecimiento de las alternativas locales será posible romper con el modelo capitalista depredador y construir un futuro climático justo y sostenible para todas las naciones.

Los recursos que deberían destinarse a reducir a cero las emisiones y hacer frente a la crisis climática siguen destinándose a los combustibles fósiles. A pesar de los graves indicios del colapso climático, Brasil, al igual que muchos otros países, sigue aplicando una política de subvenciones que favorece el petróleo, el carbón y el gas natural en detrimento de las fuentes renovables. A pesar de la presión de las empresas petroleras, el espacio de la COP es estratégico para el debate sobre el fin de los incentivos financieros y las exenciones fiscales a los combustibles fósiles. Brasil tiene todas las condiciones y la competencia técnica para liderar acuerdos multilaterales para la reforma del modelo de subsidios y la transición real del petróleo a las fuentes renovables.

Por último, es necesario reforzar la adopción de los principios de derechos humanos y participación social en los espacios multilaterales que tienen impacto en los sistemas alimentarios. Por lo tanto, se debe defender el mandato del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial como el espacio multilateral legítimo para la coordinación de la política mundial de transformación de los sistemas alimentarios y de respuesta a las crisis alimentarias, así como un mayor apoyo financiero de todos los países al Comité; además de promover, de manera coordinada y decolonial, la efectividad de la agenda de derechos humanos, incluido el derecho humano a una alimentación adecuada, como obligaciones de los Estados en las instituciones multilaterales, en el sistema de las Naciones Unidas, en los espacios de gobernanza y negociaciones internacionales y en la cooperación internacional, con impacto en la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional (SSAN) de todos los pueblos. Se destaca, además, la urgencia de reforzar la relevancia de la agenda de SSAN en las negociaciones de la Convención de las Partes sobre el Cambio Climático, dado que no será posible alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sin la transición hacia sistemas alimentarios justos, saludables y sostenibles.

4. ¿Qué tradiciones, historias o prácticas (culturales, espirituales) de su comunidad nos enseñan a vivir en mayor equilibrio con la naturaleza?

La complejidad del mundo apunta a la necesidad de promover el encuentro y el diálogo entre los diversos conocimientos, prácticas, subjetividades y ciencias frente a la diversidad de contextos, historias y culturas. Para los pueblos tradicionales de matriz africana, por ejemplo, el equilibrio con la naturaleza está arraigado en una visión del mundo sagrada y relacional, en la que todo lo que existe es parte de una misma vida. La tierra, el agua, las plantas, los animales y las piedras son reconocidos como seres vivos y hermanos/hermanas, y mantener la naturaleza es garantizar la propia existencia. La alimentación tradicional se concibe como un acto espiritual, en el que todo alimento es sagrado y debe producirse sin causar sufrimiento a ningún ser vivo,

respetando los ciclos de la naturaleza y los principios del compartir. En esta cosmovisión, producir y alimentarse son formas de reverenciar y honrar la vida, reafirmando que la naturaleza no es un recurso, sino un cuerpo colectivo del que todos formamos parte.

Desde esta misma perspectiva, las formas alternativas de relacionarse con el mundo y con el medio ambiente se expresan de manera concreta entre los pueblos y las comunidades tradicionales —pueblos indígenas, quilombolas, extractivistas, ribereños, pescadores y pescadoras artesanales, entre otros— por el respeto a las costumbres y hábitos alimentarios tradicionales, incluyendo sus modos ancestrales de preparación de alimentos. Estas cosmovisiones, asociadas a otras perspectivas y diferentes territorios, también implican dinámicas de convivencia integral con la naturaleza, como las que se buscan en los asentamientos, las periferias, la población en situación de calle, la población LGBTQIA+, los consumidores de ciudades medianas, los movimientos campesinos y las comunidades que sustentan la agricultura. Estas otras miradas promueven el acercamiento entre el campo y la ciudad en relaciones justas, accesibles física y financieramente, protegen el patrimonio genético y cultural, valorizan los alimentos in natura o mínimamente procesados e implementan estrategias autogestionadas. En este sentido, abarcan más que un mero equilibrio con la naturaleza, sino que buscan acercarse a una comprensión holística e integral de pertenencia al medio ambiente. Configuran posibilidades de reconstrucción de las formas de existir en el mundo, de nuevos modelos de sociedad, nuevos modos de producción y consumo, y de sistemas alimentarios justos, saludables, resilientes y solidarios.

Esta búsqueda de alternativas decoloniales y, al mismo tiempo, de respuestas concretas, basadas en los derechos humanos, en la superación de la dicotomía entre el ser humano y la naturaleza, se alinea con la perspectiva del Buen Vivir. Desde esta perspectiva, la democracia, la participación y el control social son fundamentales para que las diversas voces puedan oponerse a los patrones perversos de producción y consumo, en favor de una ciencia y una tecnología que se pongan al servicio de la superación de la desigualdad, del cuidado del «Otro» y del medio ambiente. Sin embargo, hay que destacar que las nociones de Buen Vivir son objeto de disputas narrativas con falsas soluciones de economía verde, que se oponen a los conocimientos y prácticas, tanto de los pueblos y comunidades tradicionales, como de los movimientos populares del campo, el agua y los bosques y los movimientos de las periferias urbanas.

Estas comunidades y movimientos valoran los conocimientos ancestrales, la agroecología, el consumo de alimentos libres de agrotóxicos, el cultivo de huertos con plantas medicinales y hierbas para condimentos, como el cilantro, la cebolleta y el romero, la valorización de las semillas criollas y el aprovechamiento integral de los alimentos, manteniendo huertos productivos, y la gestión sostenible y comunitaria de la pesca artesanal, que garantizan la autonomía y la seguridad alimentaria y nutricional. Sus prácticas reflejan una relación de cuidado y conservación de los biomas y la sociobiodiversidad, promoviendo una alimentación justa, saludable y sostenible, producida en condiciones de vida y de trabajo dignas y respetando la cultura alimentaria brasileña. Expresan formas de solidaridad, de compartir los alimentos, pero también de significados subjetivos, tal y como se describe en el Manifiesto de la 5.ª Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2015), en el que la comida de verdad se entiende como rituales de convivencia cotidiana («comer juntos»), salvaguarda de la vida, desde la lactancia materna como primer y fundamental alimento para la supervivencia y

un estilo de vida saludable, hasta la comida de verdad como acto político, como dimensión sagrada, configurándose en la construcción de identidades y ritos, sin someterse a los intereses del mercado, capaz de promover el protagonismo de las mujeres, la salud y la paz entre los pueblos. El cultivo agroecológico, el uso colectivo de la tierra y el agua, los trabajos comunitarios y las celebraciones vinculadas a los ciclos naturales expresan la comprensión de que vivir bien es vivir en armonía con la tierra, reconociéndola como fuente de vida y no como un recurso para ser explotado. Estas tradiciones reafirman que la sostenibilidad está arraigada en los diferentes territorios y nace de la reciprocidad, la solidaridad y el respeto a la naturaleza.

Entre tantos otros ejemplos, cabe citar la «gestión del pirarucu» en los lagos de la gran Amazonia. El conocimiento tradicional de los pescadores y las pescadoras sobre el comportamiento de los peces, transmitido de generación en generación, fue responsable de las prácticas de gestión que recuperaron las poblaciones de pirarucu. Esta recuperación se amplió a la conservación de otras especies de peces que también se recuperan en las zonas de gestión. El conocimiento tradicional, junto con la investigación participativa, garantizó la construcción de procesos eficaces y duraderos. A partir de la asociación entre el conocimiento ancestral y la ciencia ciudadana, fue posible definir períodos de manejo, con la definición de cuotas anuales de pesca, que dieron lugar a mejoras económicas, sociales y de seguridad alimentaria y nutricional para las poblaciones ribereñas. Esta alianza, que parte del respeto por los conocimientos tradicionales y la búsqueda compartida con la ciencia, propicia la creación de metodologías de manejo a largo plazo que garantizan la conservación de los bosques y el fortalecimiento de las comunidades.

Es necesario fortalecer el protagonismo de los maestros y las maestras de conocimientos ancestrales, reconociendo el notorio saber de las maestras y los maestros indígenas, quilombolas, afrodescendientes y de culturas populares también formalmente en las instituciones de fomento, en los espacios de toma de decisiones, en los equipos de investigadores, en los incentivos para la producción científica y como parte de las mesas de debate. Los conocimientos y prácticas ancestrales y la ciencia en diálogo pueden complementarse, acogiendo las diferencias y actualizándose sin subyugar los conocimientos, sino reposicionando a los individuos y grupos poseedores de conocimientos tradicionales en espacios privilegiados de acción.

5. Teniendo en cuenta que debemos garantizar la diversidad en el colectivo, ¿cómo podemos movilizar a más personas, líderes, corporaciones, empresas y naciones para apoyar cambios justos y éticos en la lucha contra la crisis climática? ¿Qué ideas y valores podrían inspirarnos en esta misión?

Garantizar la diversidad en el colectivo y movilizar a diferentes sectores de la sociedad para lograr cambios justos y éticos en la lucha contra la crisis climática exige valorar la pluralidad de conocimientos, culturas y territorios. Es necesario reconocer que el futuro es ancestral y que las soluciones para el planeta nacen de las experiencias y prácticas que ya existen en las comunidades indígenas, quilombolas, campesinas, ribereñas, populares y periféricas. Para ello, los espacios de cooperación deben estar libres del conflicto de intereses orientado por los beneficios de las grandes corporaciones, que deben ser responsabilizadas por las externalidades

negativas generadas y por las asimetrías de poder resultantes de la concentración del poder político y económico. Estos espacios deben ser democráticos y dar prioridad a la vida y al bien común.

La participación de la sociedad civil debe ser libre, autónoma y decisiva, de modo que su presencia en los mecanismos de gobernanza democrática se traduzca en una toma de decisiones y una implementación de acciones efectivas, y no solo en debate o escucha. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU, a nivel internacional, es un ejemplo de un importante mecanismo de gobernanza que debe fortalecerse y reforzar la participación de la sociedad civil y proteger este espacio de la influencia de las grandes corporaciones. La construcción de una movilización efectiva pasa por el fortalecimiento de los valores de solidaridad, equidad, justicia social, tributaria y ambiental, y por la creación de medidas reguladoras transparentes y vinculantes, con corresponsabilidad entre los diferentes actores estratégicos, especialmente las organizaciones de la sociedad civil.

Movilizar a las personas, los líderes, los grupos y las naciones para una transición justa y solidaria requiere la retirada gradual y planificada de los subsidios y la asignación privilegiada del presupuesto público a los sistemas alimentarios hegemónicos, así como la alineación hacia una visión común basada en el cuidado y la interdependencia. Este proceso implica repensar las tecnologías y prácticas y readaptar las infraestructuras para que sean más compatibles con la transformación socioambiental deseada. Esto también implica educar, concienciar y formar alianzas diversas, conectando personas y territorios, entendiendo que la lucha climática es, sobre todo, una lucha por la vida, la igualdad y los derechos humanos.

La crisis climática afecta de manera desigual a las poblaciones periféricas, los pueblos indígenas, los quilombolas, las personas negras, las mujeres y los jóvenes, por lo que la acción climática debe estar orientada a la defensa de la dignidad humana, la democracia participativa y la valoración de la diversidad. Asumir esta desigualdad exige como respuesta la defensa de la naturaleza, el agua, los alimentos y la tierra como bienes comunes, lo que contradice la lógica mercantilista del bien privado. Las instituciones públicas deben defender el interés público en consonancia con esta perspectiva de los derechos humanos y proteger el bien común, adoptando para ello medidas equitativas, antirracistas y de igualdad de género. Los mecanismos de discriminación positiva permiten que las personas vulnerabilizadas y los países del Sur Global accedan a los recursos y hagan viables las condiciones para la transformación socioambiental.

La justicia fiscal es otro elemento esencial y debe incorporarse como parte de la justicia climática, garantizando una financiación justa para la transición ecológica y social, mediante reformas que prioricen los derechos y la redistribución de la renta, incluyendo la tributación de las grandes fortunas y mecanismos de control de la evasión y elusión fiscal, previniendo la financiarización de los bienes comunes (naturaleza, conocimientos tradicionales, alimentos) y fortalecer la justicia redistributiva. La construcción de este movimiento exige el diálogo entre diferentes sectores sociales, involucrando a movimientos ambientales, colectivos juveniles, organizaciones de mujeres, líderes religiosos y comunitarios, siempre con respeto por los territorios y sus luchas.

Para inspirar esta misión, debemos apoyarnos en valores que unen la ética, la justicia y la esperanza activa. Podemos adoptar la triangulación de tres dimensiones de justicia: climática,

tributaria y alimentaria, que componen un eje central capaz de combatir las desigualdades y los retos contemporáneos. La solidaridad horizontal y el cuidado colectivo son también bases para una transformación duradera, mientras que la diversidad debe ser reconocida como una fuerza política, integrando los conocimientos indígenas, quilombolas, populares y científicos. El principio del Buen Vivir propone una vida integrada con la naturaleza y entre las personas, en contraposición a la lógica del lucro y la explotación. Los gobiernos deben crear mecanismos institucionalizados para escuchar de forma activa y representativa a la sociedad civil, de modo que esta participe en la toma de decisiones sobre las políticas públicas que le afectan, como el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y otros consejos. Brasil tiene ejemplos que pueden inspirar a otros países. Nuestros sistemas de políticas públicas, como los de seguridad alimentaria y nutricional, salud y asistencia social, entre otros, tienen como eje estructurante la participación social institucionalizada en consejos desde el nivel nacional hasta el municipal. La participación social no se limita a estos espacios oficiales, pero estos, como interlocutores directos para la definición y el seguimiento de las políticas públicas, deben ser valorados en sus alcances y objetivos. La democracia participativa promueve la voz y el poder de quienes más sufren los impactos de la crisis y fortalece un movimiento global y plural capaz de recrear el mundo a partir de la justicia, el respeto y el cuidado de nuestro planeta.